



Conferencia de los Estados Parte en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción

Distr. general
16 de enero de 2012
Español
Original: inglés

Grupo de examen de la aplicación
Tercer período de sesiones
Viena, 18 a 22 de junio de 2012
Tema 2 del programa provisional**
Examen de la aplicación de la Convención de
las Naciones Unidas contra la Corrupción

Resúmenes

Nota de la Secretaría

Adición

Índice

	<i>Página</i>
II. Resúmenes	2
Bulgaria	2
Indonesia	13

* Publicado nuevamente el 7 de mayo de 2012 por razones técnicas.

** CAC/COSP/IRG/2012/1.



II. Resúmenes

Bulgaria

Ordenamiento jurídico

La Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción fue firmada el 10 de diciembre de 2003 y ratificada por la Asamblea Nacional el 15 de agosto de 2006. De acuerdo con el párrafo 4 del artículo 5 de la Constitución, “todo tratado internacional ratificado de conformidad con el procedimiento constitucional, y publicado y puesto en vigor en la República de Bulgaria constituye parte integrante de la legislación nacional y tiene supremacía sobre las disposiciones internas que lo contradigan”. Esa norma ha sido aplicada de forma sistemática por los tribunales de Bulgaria. En principio, las autoridades competentes búlgaras están facultadas para aplicar directamente lo dispuesto en la Convención, a excepción de las disposiciones sobre penalización.

Conclusiones generales

Se han realizado esfuerzos considerables por reformar el ordenamiento jurídico de Bulgaria, en particular el sistema de justicia penal, con el fin de combatir los problemas de corrupción. Ello también se atribuye a que las iniciativas anticorrupción emprendidas por el país han sido objeto de evaluación por otros organismos internacionales y regionales con mandato en materia de lucha contra la corrupción o en asuntos relacionados con la corrupción (Consejo de Europa/Grupo de Estados contra la Corrupción; Consejo de Europa/Comité Especial de Expertos sobre evaluación de medidas contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo (Comité MONEYVAL); Grupo de Trabajo de la OCDE sobre el Soborno en las Transacciones Comerciales Internacionales; Mecanismo de Cooperación y Verificación Europeo).

Como resultado de ello, Bulgaria ha introducido una serie de importantes mejoras en los procedimientos penales contra la corrupción, y puede demostrar que hay un mayor número de autos de procesamiento por casos de corrupción de alto nivel, si bien todavía son pocas las causas que se han resuelto en los tribunales.

El marco institucional de Bulgaria contra la corrupción gira en torno a dos órganos principales: la Comisión para la prevención y la lucha contra la corrupción, creada en 2006, y el Centro para la prevención y la lucha contra la corrupción y la delincuencia organizada (BORKOR), que se encuentra en proceso de institucionalización. La Comisión se encarga de coordinar las actividades para la aplicación de las políticas de lucha contra la corrupción en el marco de la estrategia de la Comisión Nacional Anticorrupción y de su plan de acción, adoptados en 2009 y 2010, respectivamente. El cometido principal del BORKOR será analizar, planificar y elaborar medidas que permitan prevenir las prácticas de corrupción.

El principal reto que hay que afrontar en los próximos años es lograr que las reformas legales vayan acompañadas de reformas administrativas encaminadas a mejorar la coordinación interinstitucional y promover la aplicación efectiva de las leyes nacionales pertinentes. Un elemento fundamental para el éxito de toda

actuación contra la corrupción será definir métodos y medios para hacer frente a los retrasos en las investigaciones y los procedimientos judiciales, que pueden frustrar los esfuerzos para frenar con eficacia los delitos de corrupción. En el ámbito político, las operaciones anticorrupción se beneficiarán de la existencia de mecanismos más ágiles y mejor coordinados que permitan recopilar datos y estadísticas pertinentes, necesarios para formular estrategias específicas de prevención del delito y de justicia penal.

Otra de las dificultades que hay que superar a nivel legislativo es lograr que el grupo de trabajo para la elaboración de un nuevo código penal, que inició su labor en noviembre de 2009, produzca resultados sustanciales. A ese respecto, las autoridades búlgaras acogieron con agrado la buena disposición de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito para aportar, en caso necesario y previa solicitud, sus conocimientos y asesoramiento en materia legislativa, con el fin de facilitar las deliberaciones y los debates del grupo de trabajo.

Penalización y aplicación de la ley

Penalización

Las disposiciones de la legislación búlgara que penalizan las conductas relacionadas con la corrupción han sido modificadas en varias ocasiones en el pasado para garantizar su conformidad con las normas internacionales anticorrupción. A ese respecto, las disposiciones sustantivas en materia de penalización enunciadas en el ordenamiento jurídico de Bulgaria cumplen, en su mayor parte, con los requisitos establecidos en la Convención contra la Corrupción. La mayoría de los delitos incluidos en la Convención están contemplados en el Código Penal búlgaro. El delito de malversación o peculado de bienes en el sector privado no está tipificado como un delito independiente en el Código Penal, si bien su enjuiciamiento se lleva a cabo por analogía, tomando como base las disposiciones correspondientes al delito de malversación de bienes en el sector público, teniendo en cuenta la condición de funcionario público de la persona según la definición del artículo 93 del Código Penal y el carácter “no público” de los bienes objeto de malversación.

El enriquecimiento ilícito tampoco está tipificado como un delito independiente. Las limitaciones constitucionales relativas al derecho a ser considerado inocente, hasta que se demuestre lo contrario según la ley, dificultan la aplicación del artículo 20 de la Convención contra la Corrupción en el ordenamiento jurídico de Bulgaria. Por otra parte, no está previsto incluir dicho delito en una futura revisión del Código Penal. No obstante, en un contexto más general, el concepto de obtención de ganancias ilícitas como resultado de actos delictivos relacionados con la corrupción puede dar lugar a la imposición de sanciones materiales como la incautación y el decomiso del producto del delito, o de los bienes derivados del hecho delictivo o utilizados para su comisión. La legislación en materia de declaración de patrimonio y de conflicto de intereses es aplicable a un amplio grupo de “personas que ejercen cargos públicos” y prevé una serie de sanciones administrativas.

El concepto de “funcionario público” está definido en la legislación interna en un sentido amplio e incluye a “todo funcionario que ejerza un cargo oficial de responsabilidad”. En lo que se refiere al carácter del “beneficio indebido”, no se

diferencian los pagos o regalos realizados en función de la cantidad de dinero entregada: incluso el pago de un pequeño soborno está penado por la ley.

Los evaluadores formularon las siguientes observaciones para su consideración por las autoridades búlgaras:

- Es preciso definir el delito de soborno activo en el sector público y, en aras de una mayor coherencia, también el delito de tráfico de influencias, de modo tal que incluya de forma expresa e inequívoca toda situación en que el beneficio no esté destinado al propio funcionario, sino a un tercero (tercero beneficiario), sea éste persona física o jurídica. A ese respecto, el equipo de evaluadores tomó en consideración la labor emprendida por el Grupo de Trabajo para la redacción de un nuevo Código Penal y espera que el Grupo arbitre las medidas oportunas para dar mayor claridad a la aplicación del concepto de tercero beneficiario también en el caso de soborno activo y tráfico de influencias.
- Por otra parte, se considera que la penalización específica de la conducta de un intermediario en virtud del artículo 305a del Código Penal constituye un vestigio de la legislación anterior de Bulgaria, que perdió vigencia tras las modificaciones introducidas en el Código Penal en 2002, según las cuales todo acto de soborno fue incluido como elemento objetivo del delito en cuestión; además, su ámbito de aplicación se ha limitado a casos en que se ha pagado un soborno a un intermediario, omitiendo éste entregarlo a su destinatario final. El equipo de examen formuló esas observaciones teniendo en cuenta el trabajo que está llevando a cabo el Grupo de Trabajo para la redacción de un nuevo Código Penal y con la finalidad de facilitar esa tarea.
- Es posible que sea necesario seguir esforzándose por aclarar la interpretación de la legislación interna, con el fin de definir la diferencia entre los elementos objetivos del soborno activo y del soborno pasivo, por un lado, y la tentativa de soborno, por otro; además, hay que aclarar la interpretación de las enmiendas legislativas relativas a la inclusión del beneficio material e inmaterial en las disposiciones sobre soborno del Código Penal.

La legislación búlgara no limita el espectro de delitos determinantes de los que se derive un producto que pueda pasar a constituir materia de un delito de blanqueo de dinero. La disposición pertinente del Código Penal considera todo tipo de delitos, tanto de naturaleza penal como administrativa, e independientemente de su gravedad, como delitos determinantes, siendo, por tanto, más estricta que la Convención.

Las autoridades búlgaras señalaron que la disposición relativa al blanqueo de capitales actualmente en vigor en la legislación interna (artículo 253) está formulada en sentido amplio, y permite enjuiciar y castigar a un delincuente a la vez por el delito determinante y por el blanqueo del producto del delito.

Si bien reconocieron los considerables esfuerzos realizados por Bulgaria para ajustar su ordenamiento jurídico a lo dispuesto en la Convención contra la Corrupción en materia de penalización, los evaluadores definieron una serie de

áreas de mejora. A tal efecto, señalaron a las autoridades competentes las cuestiones que figuran a continuación. Convendría:

- Reconsiderar la utilidad de mantener la disposición autónoma relativa a la penalización de la conducta de un intermediario en caso de soborno y, si se estima conveniente, de tráfico de influencias. A ese respecto, convendría estudiar la posibilidad de introducir modificaciones en el texto de las disposiciones pertinentes sobre soborno y tráfico de influencias con el fin de incluir expresamente la frase “en forma directa o indirecta”, de conformidad con el texto de la Convención;
- Asegurarse de que los delitos de soborno activo en el sector público y de tráfico de influencias queden tipificados de forma tal que incluyan de manera inequívoca los casos en que el beneficio no esté destinado al propio funcionario, sino a un tercero (tercero beneficiario);
- Seguir trabajando para aclarar la interpretación de la legislación interna en relación con la inclusión de beneficios materiales e inmateriales en las disposiciones del Código Penal relativas al soborno;
- Seguir trabajando para aclarar la interpretación de la legislación interna a la hora de definir la diferencia entre los elementos objetivos de soborno activo y de soborno pasivo, por un lado, y la tentativa de soborno, por otro y, por consiguiente, determinar si las disposiciones sobre tentativa de soborno han perdido, en principio, su pertinencia en la práctica judicial;
- Cuando se considere oportuno, teniendo en cuenta el carácter facultativo del artículo 28 de la Convención contra la Corrupción, así como la jurisprudencia nacional pertinente, sistematizar y hacer el mejor uso posible de la información relativa a la manera en que las pruebas directas o basadas en indicios deben ser presentadas a los tribunales y evaluadas por los jueces;
- Seguir trabajando para aclarar, si se estima oportuno, la interpretación de la legislación interna en cuanto a la ampliación del ámbito de aplicación del artículo 206 del Código Penal, de conformidad con el artículo 22 de la Convención contra la Corrupción, con el fin de que incluya como objeto de malversación en el sector privado “cualesquiera bienes, fondos o títulos privados o cualquier otra cosa de valor” y no únicamente “un bien mueble de otra persona”;
- Asegurarse de que se proporcionan al Secretario General de las Naciones Unidas copias de las leyes nacionales que dan efecto al artículo 23 de la Convención (Blanqueo del producto del delito), así como de cualquier otra enmienda ulterior que se haga a tales leyes o una descripción de ésta.

Las autoridades búlgaras indicaron que la aplicación del artículo 282 del Código Penal (“Abuso de confianza con consecuencias penales”) planteaba problemas, pues al haber sido concebido en el contexto de sistemas sociopolíticos y situaciones económicas diferentes, no es aplicable a casos en que el beneficio está destinado a personas jurídicas del sector privado. Las causas judiciales enmarcadas en el ámbito del artículo 282 suelen ser sobreeséidas o dan lugar a la absolución de los acusados de conformidad con la práctica judicial ya establecida de exonerar de las responsabilidades previstas en el mencionado artículo a un amplio grupo de

personas a quienes no es aplicable el término “funcionario público”. Así pues, es preciso adoptar un nuevo enfoque penal y regular jurídicamente los denominados “delitos cometidos en el ejercicio del cargo”.

Aplicación de la ley

Las sanciones aplicables a personas que hayan cometido delitos de corrupción en el sector público parecen ser suficientemente disuasorias, dada la pena máxima prevista. La imposición de una multa siempre constituye una sanción adicional. El derecho penal general contempla unos mínimos legales en relación con dichas sanciones. Las penas máximas aplicables a los delitos de corrupción en el sector privado son inferiores a las previstas para los funcionarios públicos, aunque su grado de severidad las sitúa en torno a la media. También son de aplicación a estos delitos sanciones adicionales como el decomiso de bienes o la privación de ciertos derechos.

En términos generales, se determinó que la legislación búlgara se ajusta al artículo 29 de la Convención relativo a los plazos de prescripción, aunque no existe información suficientemente completa acerca del régimen de prescripción aplicable a las personas jurídicas en las jurisdicciones civil y administrativa ni sobre la suspensión del plazo de prescripción cuando el presunto delincuente haya eludido la administración de justicia.

Bulgaria ha decidido instaurar un marco legal para establecer la responsabilidad administrativa de las personas jurídicas involucradas en la comisión de delitos tipificados en la Convención contra la Corrupción. Bulgaria informó de que, a pesar de la falta de información estadística sobre la aplicación de las sanciones en la práctica, las sanciones monetarias aplicables a personas jurídicas se consideraban suficientemente efectivas, proporcionadas y disuasorias, en especial habida cuenta de los bajos niveles de ingresos. Por otra parte, si bien la legislación dispone expresamente que las sanciones no pueden ser inferiores al equivalente económico del beneficio, éstas parecen ser relativamente inferiores a lo que cabría esperar. Los expertos gubernamentales propusieron que las autoridades nacionales estudiaran la posibilidad de aumentar las sanciones monetarias contra personas jurídicas por delitos de corrupción en los casos en que el beneficio obtenido por la persona jurídica como resultado de un soborno procedente del extranjero no consista en un “bien”, o si resultase imposible determinar el valor del beneficio en cuestión.

La Constitución establece cuáles son las personas que gozan de inmunidad penal en el ejercicio de sus funciones, a saber: el Presidente y Vicepresidente de la República (salvo en caso de alta traición o violación de la Constitución); los miembros del Parlamento Nacional (salvo en caso de delito grave); los miembros del Tribunal Constitucional; los candidatos a elecciones legislativas, presidenciales y locales, o al Parlamento Europeo (salvo en caso de delito grave).

La Constitución búlgara garantiza de forma explícita la independencia de las autoridades judiciales. En concreto, la Constitución reconoce la independencia de la Fiscalía, como parte del sistema judicial, con relación a la influencia de cualquier factor externo que pueda impedir que ejerza sus funciones y competencias de forma imparcial y con arreglo a la ley. Las atribuciones que legalmente corresponden a la Fiscalía están previstas en la Constitución, en la Ley de la Judicatura y en el Código de Procedimiento Penal, que especifican minuciosamente las condiciones

en que el Fiscal debe ejercer su labor, y, en lo esencial, no contemplan facultades discrecionales en el ejercicio de sus funciones.

Dentro de la Fiscalía, se han creado departamentos especiales para luchar contra la corrupción. Desde 2009, la Ley de la Judicatura permite al Fiscal Jefe, y a los titulares de los ministerios y de otras instituciones del Estado, establecer unidades interdepartamentales especializadas para colaborar en las investigaciones bajo la dirección operativa de un fiscal nombrado por éste.

En la nueva estrategia de Bulgaria para la reforma del Poder Judicial, a la vez que se reconoce la existencia de deficiencias en el procedimiento judicial, se presta especial atención al fortalecimiento de las instituciones y al aprovechamiento de la capacidad del Poder Judicial para mejorar la calidad de la justicia y la eficiencia del sistema. La estrategia se centra en tres objetivos prioritarios: mejorar la gestión y el gobierno del estamento judicial, centrarse en el ciudadano y combatir la corrupción dentro del sistema judicial. La estrategia ha recibido un amplio apoyo de la clase política, de la judicatura y de la sociedad civil. El éxito de la reforma dependerá de su aplicación efectiva por todas las instituciones pertinentes.

Las actuaciones encaminadas a subsanar las deficiencias relacionadas con la asunción de responsabilidades por el estamento judicial son de crucial importancia. En casos recientes de presunta corrupción, tráfico de influencias y mala gestión del Poder Judicial búlgaro, las autoridades disciplinarias y judiciales respondieron de forma cabal. Se insta a las autoridades búlgaras a que aprovechen esa respuesta y sigan consolidando el deber de rendir cuentas por el estamento judicial aplicando de manera coherente y rigurosa todos los medios legales y disciplinarios para sancionar los actos de corrupción.

Las reformas del Ministerio del Interior tuvieron por objeto mejorar la eficacia de la lucha contra la corrupción. Se dotó a las instituciones de los medios necesarios para la prevención, detección, interceptación e investigación de actos de corrupción mediante la creación de tres direcciones especializadas. El Ministerio del Interior está facultado para investigar el 97% de los delitos tipificados en el Código Penal. Las últimas enmiendas del Código de Procedimiento Penal que entraron en vigor en mayo de 2010 fortalecieron aun más las competencias del Ministerio del Interior en materia de investigación.

La ley de Bulgaria relativa al decomiso del producto del delito fue promulgada en 2005 y establece el marco jurídico para el embargo preventivo y el decomiso del producto de un delito. La mayor parte de los delitos tipificados en la Convención contra la Corrupción son objeto de la ley, a excepción del soborno en el sector privado. Con el fin de garantizar la eficacia de las medidas pertinentes, se creó una comisión para la detección de bienes adquiridos como resultado de actividades delictivas, en virtud de la ley de 2005. Esa comisión ha incoado 21 procedimientos para determinar la procedencia de bienes pertenecientes a personas que han cometido un delito en virtud de la Convención.

El procedimiento para la protección de testigos en el marco de un proceso penal se establece de conformidad con el Código de Procedimiento Penal y la Ley especial de 2004 sobre la protección de personas amenazadas con relación a procedimientos penales.

Las normas para la protección de denunciantes únicamente están contempladas en la Ley de prevención y detección de conflictos de intereses de 2008 y no existen disposiciones detalladas acerca de la protección de las personas que proporcionen información útil sobre actos de corrupción. La promulgación de leyes en ese sentido reforzaría significativamente los esfuerzos de Bulgaria por prevenir y detectar actos de corrupción y es, por tanto, sumamente recomendable.

Las autoridades búlgaras consideran una buena práctica que su legislación nacional prevea mecanismos que permitan a las personas que sufren daños como consecuencia de la comisión de un delito entablar actuaciones judiciales contra el autor de dicho delito. Puede interponerse una denuncia civil contra el acusado o contra quienes tienen responsabilidad civil por sus actos. Se establece el pago de indemnizaciones tanto por daños materiales como inmateriales. La víctima puede actuar como demandante civil únicamente en el ámbito de las actuaciones judiciales y prejudiciales.

La cooperación del autor de un delito de corrupción con las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley se considera atenuante de la responsabilidad penal en un procedimiento penal. Una disposición especial sobre soborno activo prevista en el Código Penal establece que toda persona que haya ofrecido, prometido o concedido un soborno no será castigada, si ha sido objeto de chantaje por el funcionario, árbitro o experto para que lo haga, o si ha informado a las autoridades de forma inmediata y voluntaria. En las disposiciones sobre blanqueo de capitales se adopta un enfoque similar, y se establece que el autor del delito no será castigado siempre que, antes de concluir el acto de blanqueo de dinero, ponga fin a su participación en éste y notifique el hecho a las autoridades.

El levantamiento del secreto bancario tiene lugar mediante autorización judicial, siempre que existan pruebas de que se ha cometido un delito, incluidos los delitos de corrupción. Habida cuenta de los posibles retrasos que pudieran producirse en la obtención de la orden judicial pertinente para conseguir el levantamiento del secreto bancario, podría ser necesario considerar la posibilidad de relajar las actuales normas y procedimientos, teniendo en cuenta el enfoque general adoptado por la legislación interna en relación con las autoridades competentes para conceder la autorización.

Según lo dispuesto en el Código Penal, todos los delitos de soborno y tráfico de influencias están sujetos a las normas de la jurisdicción penal. Bulgaria ejerce su jurisdicción respecto de los delitos cometidos en su territorio nacional, los delitos cometidos por ciudadanos búlgaros, los delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos extranjeros que afecten los intereses de la República de Bulgaria o de un ciudadano búlgaro, y los delitos cometidos en el extranjero por ciudadanos extranjeros, siempre que lo prevea un tratado internacional en el que la República de Bulgaria sea parte. También ejerce su jurisdicción respecto de los delitos cometidos parcialmente en Bulgaria.

En términos generales, con respecto a los requisitos enunciados en la Convención en la esfera de la aplicación de la ley, cabe formular las siguientes observaciones adicionales. Convendría:

- Estudiar la posibilidad de aumentar las sanciones monetarias impuestas a personas jurídicas por delitos de corrupción en los casos en que el beneficio obtenido por la persona jurídica como resultado de un soborno procedente

del extranjero no consista en un “bien”, o si resultase imposible determinar el valor del beneficio;

- Estudiar la posibilidad de establecer un sistema amplio de protección de las personas que denuncien ante las autoridades competentes, de buena fe y con motivos razonables, cualesquiera hechos relacionados con delitos tipificados con arreglo a la presente Convención. A ese respecto, habría que considerar la adopción de las siguientes medidas:
 - o Definir un ámbito de aplicación amplio de la legislación pertinente, con el fin de prever medidas como el reconocimiento institucional de la denuncia, la protección de la carrera profesional de los denunciantes y la prestación de apoyo psicológico para esas personas, así como el traslado de éstas dentro de la misma organización o su reubicación en otra diferente; y
 - o Mejorar la formación de los funcionarios públicos para que informen sobre posibles actos de corrupción en la administración pública;
- Estudiar la posibilidad de ampliar el ámbito de aplicación de la legislación que regula la reducción de las penas o la exoneración de responsabilidad penal de quienes colaboren con los órganos encargados de hacer cumplir la ley, con el fin de contemplar casos concretos de un número mayor de delitos tipificados en la Convención, y no únicamente los de soborno activo y blanqueo de dinero.
- Estudiar la posibilidad de celebrar acuerdos o arreglos con otros Estados Parte, de conformidad con el derecho interno, con el fin de que las autoridades encargadas de hacer cumplir la ley de esos Estados puedan ofrecer una reducción de la pena a cambio de cooperación sustancial en relación con un delito de corrupción;
- Considerar la ampliación del ámbito de aplicación de la ley relativa al decomiso del producto del delito para que incluya el soborno en el sector privado;
- Asegurarse de que se adoptan todas las medidas necesarias para seguir reforzando la correcta administración de los bienes objeto de embargo preventivo, incautación o decomiso, derivados de la comisión de los delitos previstos en la legislación interna de conformidad con la Convención, o bien utilizados para perpetrar dichos delitos o destinados a ser utilizados en su comisión;
- Cuando se considere oportuno, garantizar una mayor claridad de las leyes que regulan la reubicación de funcionarios públicos acusados de un delito tipificado en la Convención, teniendo presente la necesidad de respetar el principio de presunción de inocencia;
- Velar por que las autoridades nacionales tengan presente la gravedad de los delitos de corrupción a la hora de considerar la eventualidad de conceder la libertad anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido declaradas culpables;
- Proseguir con los esfuerzos realizados a nivel nacional para combatir la corrupción, mediante órganos independientes de aplicación coercitiva de la

ley dedicados, en particular, a resolver los problemas de aplicación en esa esfera y a reforzar la obligación del estamento judicial de rendir cuentas, aplicando de manera coherente y estricta todos los medios legales y disciplinarios para sancionar la corrupción;

- Flexibilizar los requisitos exigidos para la obtención de autorización para el levantamiento del secreto bancario en el marco de las investigaciones nacionales de casos de corrupción.

Cooperación internacional

Si bien en Finlandia la Convención contra la Corrupción es de aplicabilidad directa, sigue habiendo cierta preocupación en relación con las disposiciones del tratado que no son de aplicación automática. A ese respecto, Finlandia debería seguir estudiando si algunas disposiciones de la Convención exigen la promulgación de leyes para su plena aplicación.

Extradición

En Bulgaria se ha instaurado un sistema de extradición en dos niveles. En lo que respecta a otros Estados Miembros de la Unión Europea, la entrega de fugitivos se efectúa de conformidad con los requisitos de la decisión marco del Consejo Europeo de 13 de junio de 2002, relativa a la orden de detención europea y a los procedimientos de entrega entre Estados miembros de la Unión Europea. La decisión marco fue transpuesta al ordenamiento jurídico búlgaro mediante una ley específica en 2005, mientras que la parte de la ley relativa a la ejecución de las órdenes de detención europeas entró en vigor tras la adhesión de Bulgaria a la Unión Europea.

En lo que atañe a otros países, si bien Bulgaria no supedita la extradición a la existencia de un tratado, está vinculada por una serie de tratados multilaterales, como el Convenio europeo sobre extradición y sus dos protocolos adicionales, y la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional. Bulgaria también ha celebrado tratados bilaterales en materia de extradición con España, Azerbaiyán, China, Armenia, el Líbano, Uzbekistán, la India, los Estados Unidos de América y la República de Corea.

Bulgaria reconoce que la Convención contra la Corrupción constituye una base jurídica en los procedimientos de extradición, aunque no se hayan formulado solicitudes en ese sentido. En ausencia de un tratado internacional, se aplicará la legislación interna en materia de extradición de acuerdo con el principio de reciprocidad.

Para conceder la extradición es necesario que se cumpla el requisito de la doble tipificación. Únicamente podrá obviarse ese requisito en los casos en que se ejecute una orden de detención europea, ya que la decisión marco exime de su cumplimiento con relación a un amplio espectro de delitos, incluidos los delitos de corrupción.

Bulgaria permite la entrega de sus ciudadanos solamente si existe una orden de detención europea, a condición de que, una vez celebrado el juicio en el país emisor, el acusado sea devuelto a Bulgaria con objeto de cumplir la pena privativa de libertad o el auto de internamiento.

En los casos en que las autoridades búlgaras denieguen la extradición de un fugitivo para que cumpla condena únicamente por motivos de nacionalidad, la legislación interna establece la obligación de remitir el caso a la fiscalía correspondiente, con el fin de llevar a cabo acciones penales, si existiera fundamento para ello. También es habitual que las autoridades búlgaras a quienes se haya formulado el requerimiento recomienden al Estado requirente que solicite el reconocimiento de la validez internacional de la sentencia, de conformidad con el Convenio europeo sobre la validez internacional de las sentencias penales.

Entre los ejemplos más característicos de denegación de solicitudes de extradición figuran las denegaciones por prescripción del delito que motivó la solicitud, así como los casos en que la extradición se solicita por delitos políticos.

Normalmente, los procedimientos de extradición en que Bulgaria interviene como Estado requerido pueden durar hasta dos o tres meses, a excepción de casos complejos y siempre en función del grado de cooperación del Estado requirente. En cuanto a la ejecución de las órdenes de detención europeas, la legislación interna prevé plazos más reducidos, y la totalidad del procedimiento debería durar un máximo de 60 días.

Asistencia judicial recíproca

La asistencia judicial recíproca en materia penal se presta de conformidad con lo dispuesto en el Código de Procedimiento Penal, que contiene una lista no exhaustiva de los tipos de asistencia que pueden prestarse en relación con investigaciones, enjuiciamientos y actuaciones judiciales. El alcance de la asistencia judicial recíproca no está limitado por la ley y abarca todas las demás formas de asistencia judicial que pueda prestarse, bien de acuerdo con los tratados internacionales en los que Bulgaria es parte, o de conformidad con el principio de reciprocidad. La asistencia también puede brindarse con relación a asuntos civiles y administrativos que pudieran dar lugar a actuaciones penales. Las disposiciones de la Convención contra la Corrupción en materia de asistencia judicial recíproca son de aplicación directa, en virtud del párrafo 4 del artículo 5 de la Constitución búlgara. Bulgaria ha celebrado acuerdos bilaterales sobre asistencia judicial recíproca con los Estados Unidos y con la República de Corea.

El Código de Procedimiento Penal enumera los motivos por los que se puede desestimar una solicitud de asistencia judicial recíproca. El secreto bancario no es uno de ellos. Por otra parte, la doble tipificación no es una condición para la prestación de asistencia.

La autoridad central designada encargada de examinar las solicitudes recibidas es el Ministerio de Justicia. Las solicitudes de asistencia deben ir acompañadas de una traducción al búlgaro o al inglés.

Hasta la fecha no se han recibido solicitudes de asistencia judicial recíproca que hagan referencia explícita a la Convención contra la Corrupción. El Sistema de Información Unificado de 2008 garantiza que todas las solicitudes queden registradas. Cabe señalar que resulta difícil recuperar información anterior a 2008.

El plazo para resolver las solicitudes de asistencia judicial recíproca varía en función de los instrumentos internacionales aplicables, del tipo de asistencia

solicitada y de la complejidad del caso. Por término medio, la tramitación de solicitudes de asistencia judicial recíproca suele demorar de cuatro a seis meses.

Tras realizar un análisis exhaustivo de los tratados internacionales sobre cooperación internacional en materia penal en los que Bulgaria es parte, un grupo de trabajo especial propuso una serie de enmiendas del Código de Procedimiento Penal en relación con las disposiciones relativas a la asistencia judicial recíproca en materia penal. En concreto, Bulgaria ha adoptado medidas para dar cumplimiento a los requisitos previstos en el artículo 46 de la Convención.

Otras formas de cooperación internacional

El traslado de personas condenadas está regulado por los siguientes instrumentos: los convenios multilaterales específicos que vinculan a Bulgaria (Convenio europeo sobre el traslado de personas condenadas y su protocolo adicional) o los acuerdos que contienen disposiciones relativas a ese tipo de cooperación, incluidas la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional y la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción; la legislación secundaria de la Unión Europea; los tratados bilaterales como los celebrados con Turquía y con el Líbano; y la legislación nacional (Código de Procedimiento Penal). En ausencia de tratados internacionales, el traslado de personas condenadas podría efectuarse con arreglo al principio de reciprocidad.

Las disposiciones relativas a la remisión de actuaciones penales han sido evaluadas y modificadas como resultado de las conclusiones de un grupo de trabajo especial para la reforma del Código de Procedimiento Penal. No se han registrado casos de remisión de actuaciones con arreglo a la Convención contra la Corrupción.

Bulgaria informó sobre el papel fundamental que desempeña el Ministerio de Justicia a la hora de facilitar y coordinar la cooperación en materia de cumplimiento de la ley. Entre los canales actualmente existentes utilizados por Bulgaria para la cooperación en materia de cumplimiento de la ley figuran la Red Judicial Europea, Eurojust, Europol e INTERPOL. Se han creado canales de comunicación directa entre las fiscalías búlgaras y sus homólogas extranjeras, con el fin de facilitar un intercambio de información rápido y seguro.

Durante el período comprendido entre 2003 y 2010, Bulgaria firmó acuerdos bilaterales sobre cooperación policial con Bosnia y Herzegovina, Rumania (centrado específicamente en la prevención y el control de la corrupción), la Federación de Rusia, Polonia y Austria.

Bulgaria considera que la Convención contra la Corrupción constituye la base jurídica para la cooperación y, en ausencia de tratados bilaterales, sus disposiciones son de aplicación en el país. Bulgaria es parte en una serie de tratados multilaterales, que conforman el marco jurídico necesario para llevar a cabo investigaciones conjuntas en más de un país. Además, Bulgaria ha celebrado acuerdos bilaterales para realizar investigaciones conjuntas con Alemania, Bélgica, España, Francia, Noruega, Rumania, Turquía y el Reino Unido. Cabe esperar que se celebren tratados similares con Serbia, Montenegro y la ex República Yugoslava de Macedonia. También se ha celebrado un acuerdo con Estonia sobre intercambio de experiencias y formación en materia de cumplimiento de la ley. Las investigaciones conjuntas pueden llevarse a cabo caso por caso, una vez que se analicen las circunstancias minuciosamente y se cree el equipo.

Bulgaria también aportó información acerca del marco internacional que vincula al país en relación con el uso de técnicas de investigación especiales, incluido el Convenio de aplicación del Acuerdo de Schengen de 1985; el Convenio relativo a la asistencia judicial en materia penal entre los Estados miembros de la Unión Europea de 2000; el segundo protocolo adicional al Convenio europeo sobre cooperación judicial en materia penal de 1959; y la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas. Cada uno de los acuerdos bilaterales mencionados, todos ellos celebrados recientemente, contiene disposiciones sobre el empleo de técnicas especiales de investigación. La Ley de inteligencia especial ofrece un marco jurídico interno para la regulación de las cuestiones pertinentes. Además, se realizaron 11 entregas controladas en 2007, tres en 2008 y 14 en 2009.

Con el fin de ayudar a las autoridades nacionales a hacer más robustos y eficaces los mecanismos de cooperación internacional, cabe formular las observaciones siguientes. Convendría:

- Seguir estudiando las oportunidades de participar activamente en arreglos de extradición bilaterales y multilaterales con otros países (sobre todo, con países de fuera de Europa), a fin de aumentar la eficacia de las extradiciones, aunque el funcionamiento del sistema nacional de extradición no esté supeditado a la existencia de un tratado;
- Estudiar la posibilidad de relajar la aplicación estricta del requisito de doble tipificación en el caso de delitos previstos en la Convención contra la Corrupción que vayan más allá de los relacionados con la ejecución de las órdenes de detención europeas, de conformidad con el párrafo 2 del artículo 44 de la Convención;
- Seguir garantizando que los delitos tipificados con arreglo a la Convención no sean considerados o definidos como delitos políticos, con el fin de obstaculizar el proceso de extradición;
- Seguir esforzándose por garantizar que los procedimientos de extradición se lleven a cabo en el menor tiempo posible;
- Seguir fortaleciendo la capacidad y eficacia del Sistema de Información Unificado como mecanismo centralizado para la recopilación, el tratamiento y la difusión de la información y las estadísticas relativas a los aspectos operativos del proceso de extradición y de los procedimientos de asistencia judicial recíproca, y continuar trabajando para establecer un nuevo sistema de integración que permita a los fiscales recopilar estadísticas y generar informes acerca de distintos temas utilizando esos datos;
- Considerar la posibilidad de asignar recursos adicionales para incrementar la eficacia y la capacidad de los mecanismos de cooperación internacional.

Indonesia

Ordenamiento jurídico

El ordenamiento jurídico de Indonesia es un sistema de derecho civil que parte del legado colonial holandés. Por razones históricas, tres ordenamientos jurídicos

diferentes conviven en la Indonesia moderna: el *Adat* (derecho consuetudinario), el derecho colonial holandés y la ley islámica.

La transposición de las disposiciones de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción al ordenamiento jurídico indonesio quedó asegurada con la promulgación de la Ley 7/2006, mediante la que Indonesia ratificó la Convención. La ley por la que se ratifica la Convención es de rango inferior a la Constitución, pero está al mismo nivel que otras leyes del país.

Penalización y aplicación de la ley

Penalización

Los delitos tipificados con arreglo a la Convención se recogen, en su mayoría, en la Ley 31/1999 sobre la Erradicación de la Corrupción, modificada por la Ley 20/2001, el Código Penal, y la Ley 8/2010 sobre Prevención y Erradicación del Delito de Blanqueo de Capitales.

Indonesia ha penalizado un importante número de delitos de corrupción y delitos conexos. Éstos incluyen los delitos de soborno activo y pasivo cometidos por funcionarios públicos, el abuso de funciones, la participación en un delito o la tentativa de cometerlo, la malversación o peculado de bienes en el sector público y en el privado, el blanqueo del producto del delito y la ocultación. Existe un amplio espectro de delitos, incluido cualquier delito cometido en el extranjero y punible con una pena de prisión de cuatro años o más, que son considerados delitos determinantes con relación al blanqueo de capitales.

Con respecto a la responsabilidad de las personas jurídicas, las autoridades indonesias reconocen que la legislación en materia de responsabilidad corporativa es aún rudimentaria y confirmaron su compromiso de extender su aplicación. Los evaluadores vieron con buenos ojos el ejercicio de autoevaluación realizado por Indonesia y el compromiso mostrado.

La legislación indonesia no contiene una definición general del delito de abuso de funciones, si bien las normas existentes reflejan los elementos principales de esa figura delictiva. Se señaló que, según la ley, el abuso debe cometerse con la finalidad de enriquecerse, lo que implica la obtención de un beneficio material; en cambio, la Convención es más amplia ya que abarca cualquier tipo de beneficio, incluidos los inmateriales. El artículo 3 de la Ley 31/1999 hace referencia a los efectos perjudiciales derivados de la conducta del autor del delito en las finanzas del Estado. Esa preocupación por la necesidad de poner de manifiesto el perjuicio sufrido por el Estado podría restringir la lucha contra la corrupción.

Los evaluadores señalaron que el abuso de funciones puede castigarse con cadena perpetua, mientras que el delito de soborno es punible con penas de entre uno y cinco años de prisión. Esta discrepancia podría requerir una revisión de esas penas.

El soborno de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas, el tráfico de influencias, el enriquecimiento ilícito, y el soborno en el sector privado aún no han sido tipificados como delitos. Se ha considerado la posibilidad de introducir su penalización en el proyecto de ley sobre

erradicación de la corrupción y en el proyecto de ley relativo al decomiso de activos. Los evaluadores instan a las autoridades a que continúen con ese proceso.

Con el fin de fortalecer y mejorar las actuales disposiciones en materia de penalización, cabe formular las recomendaciones siguientes. Convendría:

- Reconsiderar las penas aplicables a los delitos de soborno y malversación o peculado;
- Penalizar el soborno activo de funcionarios públicos extranjeros y de funcionarios de organizaciones internacionales públicas y considerar la posibilidad de penalizar el soborno pasivo de esos funcionarios;
- Eliminar los artículos 12B y 12C de la Ley 31/1999, en su forma enmendada por la Ley 20/2001, que plantean problemas de cumplimiento con los artículos 15 y 37 de la Convención, al definir una forma de soborno con agravantes (art. 12B) y conceder inmunidad a los funcionarios que informen de haber recibido un soborno en un plazo de 30 días a partir de su recepción (art. 12C);
- Garantizar que la terminología utilizada en la legislación sobre malversación o peculado incluya de forma inequívoca todo bien u objeto de valor de otro tipo, de conformidad con el artículo 17 de la Convención;
- Garantizar que las normas en vigor sobre abuso de funciones también son aplicables a los beneficios inmateriales, y estudiar la posibilidad de revisar la legislación con el fin de eliminar toda referencia al perjuicio del Estado.

Aplicación de la ley

Las disposiciones legales relativas a la investigación y el enjuiciamiento de delitos de corrupción y delitos conexos están contenidas, principalmente, en el Código de Procedimiento Penal y en el Código Penal de Indonesia.

Las funciones de investigación son desempeñadas por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK), la Fiscalía General del Estado (AGO) y la policía. En principio, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción tiene jurisdicción sobre casos de muy alto nivel. En otros procedimientos, la Fiscalía General es el órgano competente, si bien la Comisión está facultada para supervisar o asumir el control de las actuaciones. La policía también investiga delitos de corrupción. La Comisión puede investigar a altos cargos de determinadas categorías sin la aprobación previa por escrito del Ministro del Interior o el Presidente. Las actividades anticorrupción llevadas a cabo por la Comisión para la erradicación de la corrupción, la Fiscalía General del Estado y la policía están respaldadas por el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Indonesia (PPATK).

La Comisión tiene acceso privilegiado a información bancaria. No obstante, en el caso de otros organismos, podría ser necesaria la autorización del Presidente del Banco Central (art. 2, Ley 8/1998).

Todos los casos investigados por la Comisión deben llevarse a juicio. Ahora bien, no todos los casos de los que se ocupa la Fiscalía General han de llevarse a los tribunales. Pueden ejercerse facultades discrecionales para archivar un caso por motivos tales como falta de pruebas, razones de interés público, o porque el caso entrañe asuntos *de minimis*. En particular, puede ordenarse a la Fiscalía General que

archive un caso para proteger el interés público, aun cuando existan fundamentos suficientes desde el punto de vista técnico (*deponering*). Esa práctica podría parecer contraria al espíritu de la Convención y crear la impresión de que en Indonesia se permiten interferencias políticas que generan resultados inciertos, insatisfactorios para todas las partes interesadas. Los evaluadores reconocieron que esa práctica, aunque infrecuente, es, en principio, inaceptable, ya que deja la puerta abierta a que se produzcan abusos en los casos de corrupción. Los evaluadores recomendaron que la cuestión sea examinada en el proceso de revisión de la ley anticorrupción.

Los casos no graves de sobornos a agentes de policía no se dirimen en los tribunales de justicia, sino que se presentan ante una comisión interna de ética.

Los plazos de prescripción no pueden ser suspendidos. El plazo comienza a contar a partir del momento en que se comete un delito. En el caso de los delitos de corrupción, el plazo es de 12 años (para delitos castigados con más de 3 años de prisión) y 18 años (para delitos castigados con cadena perpetua).

Las disposiciones en materia de obstrucción de la justicia se consideran satisfactorias. Ahora bien, son pocas las ocasiones en que es posible llevar un caso de obstrucción de la justicia ante los tribunales.

Los fiscales no están facultados para ofrecer ningún tipo de reducción de la pena ni garantizar inmunidad judicial a quienes presten cooperación sustancial en la investigación o el enjuiciamiento de un caso de corrupción. Únicamente pueden tomar nota de la actitud colaboradora de dicha persona y formular recomendaciones al juez, que es a quien corresponde dictar sentencia.

De conformidad con la Ley 43/1999 relativa a los funcionarios del Estado, todo funcionario público sospechoso de haber cometido un delito será suspendido temporalmente de su cargo y será destituido, si es condenado por un delito punible con una pena de prisión de cuatro años o más. La Ley 19/2003 sobre empresas de propiedad estatal y la Ley 19/2003 relativa a las sociedades de responsabilidad limitada prevén la inhabilitación para desempeñar un cargo en esas empresas o sociedades de toda persona condenada por delitos de corrupción.

Los testigos, peritos y víctimas están protegidos en virtud de la Ley 13/2006 relativa a la protección de testigos y víctimas. La Dependencia para la protección de testigos (LSPK) se ocupa de su protección. Según el Código de Procedimiento Penal, toda persona que sufra un perjuicio como consecuencia de un delito tiene derecho a interponer una reclamación de indemnización ante el mismo tribunal en que se dirige la causa.

Con el fin de reforzar o mejorar la legislación en vigor, cabe formular las observaciones siguientes. Convendría:

- Considerar la posibilidad de llevar a los tribunales penales los casos no graves de sobornos a agentes de policía;
- Considerar la posibilidad de establecer procedimientos en virtud de los cuales un funcionario público que sea acusado de un delito tipificado con arreglo a la Convención pueda ser suspendido de sus funciones durante la investigación y expulsado de la función pública en caso de ser condenado;

- Considerar la posibilidad de revisar las competencias de la Unidad de Inteligencia Financiera en materia de recopilación de información a tenor de la Ley 8/2010, teniendo presentes las buenas prácticas de otros países;
- Considerar la posibilidad de llevar a cabo un estudio sobre la aplicación de las disposiciones relativas a la obstrucción de la justicia, con el fin de determinar la existencia de problemas de aplicación y definir posibles necesidades en materia de asistencia técnica;
- Considerar la posibilidad de modificar las normas relativas al régimen de prescripción aplicable, de modo que i) el plazo de prescripción comience únicamente cuando el delito haya llegado a conocimiento del fiscal, y ii) el plazo de prescripción sea interrumpido cuando el presunto autor del delito haya eludido la administración de la justicia;
- Considerar la posibilidad de que la Fiscalía General y la policía también puedan investigar a altos cargos sin necesidad de solicitar autorización previa;
- Considerar la posibilidad bien de retirar la facultad de los investigadores para cambiar el tipo de detención, y sustituir una pena de prisión por una prohibición de abandonar la ciudad, o bien de adoptar medidas para que esa facultad se ejerza bajo estricta supervisión judicial;
- Garantizar la gestión cabal de los bienes incautados, decomisados o sujetos a embargo preventivo;
- Velar por que la gravedad de los delitos de corrupción se tenga en cuenta a la hora de estudiar la posibilidad de conceder la libertad anticipada o la libertad condicional a personas que hayan sido declaradas culpables;
- Garantizar la protección de las personas que presenten una denuncia;
- Estudiar la posibilidad de adoptar medidas adicionales para asegurarse de que la corrupción sea considerada un factor pertinente en procedimientos jurídicos encaminados a anular o dejar sin efecto un contrato o a revocar una concesión u otro instrumento semejante, o adoptar cualquier otra medida correctiva;
- Garantizar que las entidades o personas perjudicadas como consecuencia de un acto de corrupción tengan derecho a iniciar una acción legal contra los responsables de esos daños y perjuicios a fin de obtener indemnización en ausencia de procedimientos penales previos;
- Estudiar la posibilidad de garantizar la exención o la reducción de la pena a los autores de delitos de corrupción que cooperen, de forma espontánea y activa, con las autoridades encargadas de aplicar la ley;
- Garantizar que el secreto bancario pueda ser levantado de forma eficaz por otros organismos.

Cooperación internacional

Extradición

Las condiciones y los procedimientos que reglamentan los procesos de extradición desde y a la República de Indonesia están recogidos en la Ley 1/1979 sobre extradición. Toda extradición debe cumplir el requisito de doble tipificación.

En Indonesia, la extradición se concede en virtud de la existencia de un tratado. En ausencia de tratado, la extradición podrá efectuarse a condición de que exista una “buena relación y que los intereses de la República de Indonesia así lo requieran”. Indonesia puede conceder la extradición de conformidad con la Convención, si el Estado requirente es parte en ésta. Indonesia ha celebrado siete tratados bilaterales de extradición con países vecinos.

La extradición únicamente se concede por delitos que se considere que pueden dar pie a extradición. En lo que atañe a las solicitudes relativas a delitos no incluidos en la lista de delitos por los que pueda concederse la extradición, ésta también podrá tramitarse con arreglo a la “política” del Estado Parte requerido. La extradición no se denegará únicamente porque se considere que el delito también entraña cuestiones tributarias.

La extradición no se concede en caso de delitos políticos. Excepcionalmente, el autor de determinado tipo de delitos políticos sólo podrá ser objeto de extradición si existe un acuerdo entre Indonesia y el país requirente.

En principio, los ciudadanos de Indonesia no pueden ser objeto de extradición. Excepcionalmente, la extradición podría concederse, si se estima que el acusado recibirá un juicio más justo en el país donde se ha cometido el delito.

En términos generales, una parte importante de las medidas previstas en la Convención son de aplicación en Indonesia. Las disposiciones siguientes podrían mejorar aun más los actuales procedimientos de extradición. Convendría:

- Estudiar la posibilidad de que la ley establezca un plazo máximo para pronunciarse sobre una extradición, con el fin de garantizar la agilidad del procedimiento;
- En caso de denegación de una solicitud de extradición de un ciudadano indonesio, garantizar que se considere la eventualidad de juzgarlo en Indonesia;
- En lo que respecta a las solicitudes de extradición de ciudadanos indonesios y en relación con la ejecución de una sentencia, asegurarse de que la sentencia sea aplicada en Indonesia, si la solicitud de extradición es denegada.

Asistencia judicial recíproca

La Ley 1/2006 sobre asistencia judicial recíproca en materia penal establece las condiciones y los procedimientos que regulan dicha asistencia. Además del Tratado de asistencia judicial recíproca en asuntos penales entre países miembros de la ASEAN, Indonesia está vinculada por sendos tratados bilaterales con Australia y China.

La asistencia judicial recíproca se proporciona en virtud de la existencia de un tratado. De no existir tratado, la asistencia judicial recíproca podrá prestarse “teniendo en cuenta las buenas relaciones y con arreglo al principio de reciprocidad”. La asistencia judicial recíproca puede proporcionarse en ausencia de doble tipificación.

La asistencia judicial recíproca no está garantizada en el caso de personas jurídicas. Se ha estudiado la posibilidad de incluir una disposición que prevea dicha asistencia en el proyecto de ley sobre asistencia judicial recíproca en materia penal.

Las solicitudes deben dirigirse a la autoridad central -el Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos- que traslada a la Comisión para la Erradicación de la Corrupción todas las solicitudes que le competen. Las solicitudes deben indicar el plazo deseado para su tramitación. Ahora bien, en la práctica, cuando se recibe una solicitud que no indica dicho plazo, las autoridades indonesias piden al Estado requirente que lo especifique. Si la información recibida no es suficiente para admitir la solicitud a trámite, las autoridades indonesias podrán solicitar más información.

Indonesia ha dado cumplimiento a todas las solicitudes de asistencia judicial recíproca recibidas.

En términos generales, la mayor parte de las medidas previstas en la Convención son de aplicación en Indonesia. Las disposiciones siguientes podrían mejorar aun más los actuales procedimientos de asistencia judicial recíproca. Convendría:

- Estudiar la posibilidad de reconsiderar las condiciones en que puede concederse asistencia judicial recíproca sin que exista un tratado, con el fin de que puedan aplicarse, al menos, medidas no coercitivas de asistencia judicial recíproca;
- Permitir la prestación de asistencia judicial recíproca en relación con delitos que puedan atribuirse a personas jurídicas;
- Garantizar que pueda remitirse información a otro Estado Parte sin necesidad de solicitud previa;
- Estudiar la posibilidad de facultar a las autoridades competentes (Policía Nacional, Fiscalía General del Estado y Comisión para la Erradicación de la Corrupción) para levantar el secreto bancario durante la ejecución de una solicitud de asistencia judicial recíproca;
- Estudiar la posibilidad de nombrar a la Comisión para la Erradicación de la Corrupción como autoridad central en todo tipo de casos de corrupción;
- De conformidad con la práctica establecida, especificar en la legislación que no es obligatorio indicar el plazo deseado para la ejecución de la solicitud y que Indonesia consultará con el Estado requirente en caso de que la información aportada en la solicitud sea insuficiente para su aceptación;
- Estudiar la posibilidad de garantizar que la ejecución de una solicitud pueda ser diferida, si perturba investigaciones, procesos o actuaciones judiciales en curso en Indonesia;
- Velar por que la asistencia judicial recíproca no pueda ser denegada porque pueda suponer una carga demasiado onerosa para las arcas del Estado,

estableciendo que el costo será sufragado por el Estado requerido, a menos que se acuerde otra cosa;

- Aunque la información a que tiene acceso el público en general haya sido facilitada a un Estado requirente, garantizar que esa práctica quede especificada en la ley;
- Estudiar la posibilidad de facilitar a un Estado requirente información y documentos que no estén a disposición del público en general.

Cooperación en materia de cumplimiento de la ley

Los organismos indonesios encargados de la aplicación de la ley están obligados a intercambiar información con organismos extranjeros en el marco de la cooperación entre organismos encargados de hacer cumplir la ley. Indonesia ha celebrado tratados bilaterales con 15 países y ha negociado acuerdos con otros cinco. Indonesia no ha celebrado tratados bilaterales ni multilaterales en relación con el traslado de personas condenadas.

La Comisión para la Erradicación de la Corrupción ha establecido una alianza oficial con 20 instituciones de 15 países. La Unidad de Inteligencia Financiera ha colaborado con 30 unidades de inteligencia financiera extranjeras. La policía tiene cierta experiencia en investigaciones conjuntas de casos relacionados con el terrorismo. Se han puesto en marcha proyectos de investigación conjunta en casos de corrupción entre la Comisión para la Erradicación de la Corrupción y otros organismos extranjeros. Pese a todo, Indonesia debe seguir mejorando su capacidad de participación en investigaciones conjuntas en casos de corrupción.

De conformidad con los tratados bilaterales celebrados, hay oficiales policiales de enlace y fiscales indonesios destacados en 20 países. Quince países cuentan con agregados policiales en Yakarta. La policía ha suscrito siete acuerdos de cooperación con organismos extranjeros encargados de aplicar la ley.

Los evaluadores subrayaron que sería importante aumentar la confianza de la opinión pública en la policía antes de plantearse la conveniencia de otorgarle facultades para interceptar comunicaciones durante la fase de investigación de los casos de corrupción.

Conclusiones generales

Desde el restablecimiento de la democracia en 1999, Indonesia ha emprendido con empeño la lucha contra la corrupción, mediante su legislación y a través de la creación de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, que tiene atribuciones en materia de investigación y enjuiciamiento. Existe el firme compromiso político de erradicar la corrupción en el sector público y en el privado. En las estrategias y planes de acción nacionales para la erradicación de la corrupción (2010-2025), formulados por el gobierno en consulta con varios representantes de la sociedad civil, se definen una serie de intervenciones estratégicas que deben acometerse, con el fin de acelerar la erradicación de la corrupción; esto incluye la adopción de medidas encaminadas a aplicar la Convención en Indonesia.

Se está preparando un proyecto de ley sobre la erradicación de la corrupción, así como otros que abordan cuestiones como el decomiso en ausencia de condena, la extradición, la asistencia judicial recíproca y la Comisión para la Erradicación de la Corrupción. Las conclusiones expuestas *supra* justifican o aclaran la necesidad de reformar las leyes existentes que regulan esas cuestiones.

Buenas prácticas

Se considera que la Comisión para la Erradicación de la Corrupción y el Tribunal Anticorrupción constituyen buenas prácticas en lo que respecta a su competencia y atribuciones, y a los buenos resultados de su labor.

Establecida en 2002, la Comisión para la Erradicación de la Corrupción es un órgano especial e independiente del Estado competente en casos de corrupción de muy alto nivel. La Comisión goza de la independencia necesaria y de amplias competencias, en virtud de la Ley 30/2002 relativa a la Comisión para la Erradicación de Delitos de Corrupción. Ha emprendido actuaciones contra ex-ministros, parlamentarios, altos cargos, alcaldes, directores de empresas y uno de los miembros de su personal. La Comisión goza de la confianza de la inmensa mayoría de la opinión pública, y del profundo respeto de los organismos internacionales encargados de hacer cumplir la ley y de las organizaciones no gubernamentales. Los evaluadores advirtieron que ningún cambio legislativo que se introdujera en relación con la erradicación de la corrupción debía dar lugar a cambio alguno en el actual mandato jurídico de la Comisión en materia de investigación y enjuiciamiento de los casos de corrupción que le competen.

El Tribunal Anticorrupción ha demostrado ser un eficaz colaborador de la Comisión para la Erradicación de la Corrupción a la hora de resolver casos de corrupción. El primer tribunal anticorrupción fue establecido en Yakarta en virtud de la Ley 30/2002, y tiene jurisdicción sobre los asuntos remitidos por la Comisión para la Erradicación de la Corrupción. Desde 2010, se han establecido otros tribunales anticorrupción por todo el país. En 2012, habrá un total de 33 tribunales anticorrupción. Los evaluadores apoyaron plenamente el plan del gobierno de ampliar el número de tales tribunales, de manera que puedan ocuparse no sólo de los casos remitidos por la Comisión, sino de todos los casos de corrupción.

Retos

Los evaluadores llegaron a la conclusión de que el principal reto en materia de aplicación reside en mejorar la cooperación entre los organismos encargados de hacer cumplir la ley -la Comisión para la Erradicación de la Corrupción, la Fiscalía General del Estado y la policía-. Los evaluadores comprobaron con satisfacción que todos esos organismos eran plenamente conscientes del gran obstáculo que supone la falta de cooperación y coordinación, y que estaban dispuestos a hacer frente a dicho obstáculo de forma constructiva para poder superarlo. Es fundamental adoptar medidas adicionales que permitan mejorar y fortalecer la cooperación y la coordinación.

Los evaluadores subrayaron que la cooperación mejoraría mediante un análisis exhaustivo del estado de la corrupción en el país, su estructura, su dinámica y sus tendencias, así como a través de un análisis de las actividades relacionadas con la detección y prevención del delito, con el fin de definir las líneas maestras de la

futura estrategia de lucha contra la corrupción. A tal fin, es necesario recopilar estadísticas de forma centralizada, unificar la notificación de los casos de corrupción y armonizar los informes a través de un único organismo. También es preciso celebrar con regularidad reuniones de coordinación entre los órganos supervisores y los órganos encargados de aplicar la ley.

Asistencia técnica

La asistencia técnica ayudaría a Indonesia en las siguientes áreas: penalización del soborno de funcionarios públicos extranjeros y funcionarios de organizaciones internacionales públicas, responsabilidad de personas jurídicas, obstrucción de la justicia, remisión de actuaciones penales, investigaciones conjuntas, uso de técnicas especiales de investigación y asistencia judicial recíproca. También es necesario prestar asistencia técnica para formar a investigadores y a fiscales en los métodos empleados para “seguirle la pista al dinero” y promover un mayor uso de la legislación contra el blanqueo de dinero.

Obligaciones de información y notificación

Los evaluadores invitaron a Indonesia a cumplir con su obligación de notificación de conformidad con lo estipulado en los artículos 23.2 e) y 44.6 a) de la Convención.
